

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : Juzgado de Letras y Gar.de Pichilemu
CAUSA ROL : C-221-2019
CARATULADO : FORESTAL NILAHUE S.A./INTENDENCIA VI
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Pichilemu, diez de Marzo de dos mil veintitrés.

VISTO:

1° Demanda: Con fecha 22 de noviembre de 2019, comparece **Alejandro Marcelo Cuevas Pizarro**, abogado, con cédula de identidad N° 16.839.294-k, en representación por mandato judicial de la sociedad **FORESTAL NILAHUE S.A.**, sociedad del giro de su denominación, con R.U.T. N° 96.637.700-3, en adelante referida solo como **“Forestal Nilahue”**, ambos domiciliados para estos efectos en Fundo Alto Colorado, sin número, cuya entrada se ubica aproximadamente en el kilómetro 107 de la Ruta 90, carretera San Fernando a Pichilemu, comuna de Pichilemu, Región de O'Higgins, quien interpone **reclamo del artículo 13 del Decreto Ley N° 1939 del año 1977**, en contra del **FISCO DE CHILE**, corporación de derecho público, con R.U.T. N° 61.006.000-5, representado judicialmente por el Consejo de Defensa del Estado – Procuraduría Fiscal de Rancagua, representado por el Abogado Procurador Fiscal de Rancagua doña Lya Hald Ramírez, con R.U.T. N° 9.754.042-K, ambos con domicilio en calle Rubio 285, of. 710, Rancagua, por el actuar del Ministerio de Bienes Nacionales – Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, al haber complementado y ampliado la resolución impugnada; y en contra de la **INTENDENCIA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS**, con R.U.T. N° 60.511.060-6, representado por el Intendente de la región del Libertador General Bernardo O'Higgins don Juan Manuel Masferrer Vidal, con R.U.T. N° 13.947.598-4, ambos con domicilio en Plaza de Los Héroes S/N, Rancagua, por haber mandatado Resolución Exenta N° 523, de fecha 28 de octubre de 2019, dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, por orden del Intendente de esa región, mediante la cual se complementa y amplía la Resolución Exenta N° 5 del 2 de julio de 1984, dictada por los mismos organismos en las mismas condiciones, que fija las vías de acceso a las playas de mar en la provincia de Cardenal Caro.



Funda su petición, señalando que Forestal Nilahue es dueña de cuatro predios de explotación forestal y ganadera, que se encuentran en las siguientes inscripciones:

- a) **Hijuela Forestal Los Pinos**, de una superficie de 1143,6 hectáreas físicas, equivalentes a 88,70 hectáreas de riego básicas, compuesta de dos porciones no colindantes, denominadas **Sector A y B**, inscritas a fojas 663 número 946 del Registro de Propiedad del año 1992 del Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu. Rol de avalúo Fiscal N°1132-9 y 1132-21, respectivamente, ambos de la comuna de Pichilemu.
- b) **Dos restos o partes de la hijuela Poniente del Plano de Hijuela del Fundo Alto Colorado**; la **hijuela poniente uno**, de una superficie aproximada de 528 hectáreas, efectivamente expropiada; y la **hijuela poniente dos**, de una superficie aproximada de 951,80 hectáreas físicas y con una cabida de 79,99 hectáreas de riego básicas. El dominio de los inmuebles, se encuentra inscrito a fojas 666, número 949 del Registro de Propiedad del año 1992 del Conservador de Bienes Raíces de Pichilemu. Rol de avalúo Fiscal N° 1132-6 Y 1132-15, respectivamente, ambos de la comuna de Pichilemu.

Agrega que sobre estos 4 predios pesa un **gravamen** impuesto en conformidad al artículo 13 del Decreto Ley N° 1939 del año 1977, establecido por resolución Exenta N°5, de fecha 2 de julio de 1984 de la Secretaría Regional Ministerial de O'Higgins, la cual estableció un camino como vía de acceso a las playas de mar, sin especificar si dicho acceso era peatonal o vehicular, pero que, desde su fijación, en la práctica, ha funcionado exclusivamente como peatonal.

Indica que el **camino inicia** en la entrada del Fundo, ubicada en la Ruta 90, carretera San Fernando a Pichilemu, desde donde se debe transitar hacia el norte atravesando la Hijuela Forestal Los Pinos Sector A, para luego continuar hacia la costa atravesado la Hijuela Poniente Uno y la Hijuela Poniente Dos hasta llegar a la playa.

Señala que, con fecha 12 de noviembre de 2019, Forestal Nilahue fue notificada personalmente de Resolución Exenta N°523, de fecha 28 de octubre de 2019, dictada por la Secretara Regional Ministerial de Bienes Nacionales, de la Región de O'Higgins, que complementa Resolución Exenta N°5, de fecha 02 de julio de 1984, permitiéndose desde ahora, el ingreso a las vías de acceso a la playa por vehículos, y no solo peatonal, como había sido hasta entonces.

Arguye que la complementación realizada a la vigente Resolución Exenta N°5 del año 1984, carece de fundamentos técnicos y obedece a motivaciones políticas antes que jurídicas o de conveniencia para la población.



Tras realizar una relación de la historia de la vía de acceso a la playa, en donde se indica que, durante 30 años, su representado permitió el acceso peatonal de turistas y pescadores, salvo al Sindicato de Buzos y Mariscadores y Ramas Similares de Pichilemu, quienes exclusivamente, poseen acceso vehicular para realizar actividades extractivas de la pesca.

Arguye, en este contexto histórico, que mediante Resolución Exenta N°1808 del año 2013, se modificó la Resolución N° 5 de 1984 respecto del acceso a la playa Topocalma, modificándose el trazado fijado por uno nuevo, y además autorizándose expresamente el acceso peatonal y vehicular. Creándose una nueva ruta de acceso peatonal y vehicular, fundado en el peligro para transeúntes del tránsito de maquinaria pesada de explotación forestal y ganadera. Sin perjuicio de ello, dicha resolución fue revocada sin fundamentación por Resolución Exenta N°1808 de fecha 21 de noviembre de 2018, la cual no fue recurrida por Forestal Nilahue. Sin embargo, con fecha 12 de noviembre de 2019, se les notificó personalmente de Resolución Exenta N°523, de fecha 28 de octubre de 2019 dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins a través del mismo Secretario Regional Ministerial don Christian Villegas Garate, quien dictó revocación de la resolución en el año 2018, por el mismo camino que siempre había sido peatonal respecto a terceros ajenos al predio, sin efectuar una visita a terreno, sin evaluar los riesgos y peligros que implica el tránsito de vehículos.

En cuanto a la **carencia de fundamentación técnica**, señala que la resolución exenta impugnada, dispone en el párrafo 2° del considerando 4°, que es necesario precisar el sentido y alcance de las palabras “acceso” y “prudencial”; y en el considerando 6° indica que se recurrió a las normas contenida en el artículo 19 y siguientes del Código Civil, particularmente en el artículo 20 del citado Código, por lo que se recurrió a las definiciones del Diccionario de la Real Lengua Española, concluyendo en el considerando 9° que la distancia existente entre la entrada de los predios gravados y la playa de mar es aproximadamente 10 kilómetros, por lo cual se concluye que el acceso debe ser principalmente vehicular. Análisis, que señala el actor, sería razonable si no fuera por las características del terreno que lo hacen peligroso para los particulares, así como el potencial riesgo de incendios forestales.

Tras citar los considerandos 10° y 11° de la resolución materia de litis, indica que ellos reconocen el motivo político sin fundamentación técnica de la decisión.

En cuanto a los motivos por los cuales el ingreso a la playa puede ser únicamente peatonal, en síntesis, indica que, debido a las características propias



del Fundo Alto Colorado, el cual ejecuta explotación forestal-ganadera, implica un peligro para terceros ajenos al predio, citando lo señalado en Resolución Exenta N°1808 del año 2013.

Agrega que, existiría un riesgo de incendios forestales debido a que los predios no son aptos para zona de camping, provocando un desastre ecológico de proporciones mayores y ruina económica de la empresa Forestal Nilahue.

Adiciona, que existiría un mayor detrimento o perjuicio para el dueño del predio, pues encare la operación forestal-ganadera. Especifica los siguientes ítems:

- a) en materia de seguros: debido a que el tránsito de terceros ajenos a la sociedad, aumentaría el riesgo actual de la compañía lo cual implicaría un alza en los gastos asociados al pago de primas; ya que eventualmente, ante la ocurrencia de un daño o perjuicio causado o atribuible a un tercero, la compañía de seguros podría no soportar o cubrir dicho daño; o eventualmente cubrirlo, pero implicaría un mayor gasto.
- b) En materia de plan de manejo de riesgos: el cual es aprobado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Con motivo del acceso vehicular se deberá definir o trazar un nuevo camino de acceso público o, en su defecto, modificar el camino interior existente. Lo cual producirá cortes o tala de plantaciones forestales; y la eventual modificación del plan de manejo aumentará los gastos de la compañía.
- c) Playa de estacionamientos: indica que una situación no prevista por la resolución, es el lugar donde estacionarán los vehículos. Los cuales no podrían ubicarse en la playa de mar; tampoco en el área de 8 metros destinada a menesteres de pesca; y posterior a ello, viene el predio de su representado, denominado Hijueta Poniente Dos, que limita al poniente *“con el Océano Pacífico y en pequeño sector con la Hacienda Panilonco”* (sic); por lo cual, **no existiría terreno de playa**, que es una faja de terreno de propiedad del Fisco sometida al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Bienes Nacionales de hasta 80 metros de ancho, medida desde la línea de la playa de la costa del litoral.

Finaliza su libelo, solicitando tener por interpuesto reclamo del artículo 13 del Decreto Ley N° 1939 del año 1977, en contra de la Resolución Exenta N° 523, de fecha 28 de octubre de 2019, y que este sea acogido, dejándose sin efecto la Resolución Exenta reclamada, por carecer de fundamento técnico, que pone en peligro la seguridad de los particulares, crea peligro de incendios forestales y causa daños innecesarios al propietario. Con expresa condenación en costas.



2° Notificación: Con fecha 03 de enero de 2020, según consta en exhorto E-3343-2019 del 2° Juzgado Civil de Rancagua, se notificó personalmente a don Juan Manuel Masferrer Vidal, Intendente de la Región de O'Higgins; y a doña Lya Hald Ramírez, abogado Procurador Fiscal de Rancagua, en representación del Fisco de Chile.

3° Audiencia: Con fecha 09 de enero de 2020, se lleva a efecto audiencia de rigor, con la asistencia del abogado de la parte demandante don Gustavo Martín Peña, y en representación de la parte demandada, la abogada doña Alejandra Hernández Vergara.

La parte demandante **ratifica su reclamación** en todas sus partes.

La parte demandada, **contesta la reclamación**, mediante minuta escrita, rolante a folio 14, la cual solicitó tener como parte integrante del comparendo.

El tribunal confirió traslado a **excepción de incompetencia de tribunal**, deducida a lo principal.

La parte reclamante se reservó el plazo para contestar.

Con fecha 13 de febrero de 2020, se incorpora minuta escrita presentada por el reclamante, mediante la cual evacúa el traslado conferido en audiencia.

4° Falla excepción dilatoria: Con fecha 24 de febrero de 2020, **se rechaza excepción dilatoria, sin costas**, interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Fisco de Chile y del Intendente Regional.

5° Excepción perentoria: En minuta escrita rolante a folio 14, la abogada de la parte demandada solicita previo a entrar al fondo de su contestación, se tenga por deducida excepción perentoria **de falta de legitimación pasiva de la demandada Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, Región de O'Higgins**, ello, atendido el tenor literal del artículo 13 del DL 1939, en el cual se señala al sujeto pasivo de la reclamación, a saber, el Intendente Regional. Por lo que deducir la acción contra el Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales, representado por el Fisco, resultaría improcedente.

6° Contestación: Señala como antecedentes que:

- a) Mediante Resolución Exenta N°5, de fecha 22 de julio de 1984, la Subsecretaría del Ministerio de Bienes Nacionales fijó las vías de acceso a las playas de mar de la Provincia de Cardenal Caro.
- b) Indica que, mediante Resolución Exenta N°1808, de fecha 14 de noviembre de 2013, la Subsecretaría del Ministerio de Bienes Nacionales, a requerimiento de los propietarios de predios colindantes de la playa Topocalma, modificó el Resolución Exenta N°5, solo respecto a las vías de acceso fijadas en el punto 1.5 sobre acceso a playa Topocalma.



- c) Por Resolución Exenta N°484, de fecha 9 de noviembre de 2017, la Subsecretaria del Ministerio de Bienes Nacionales, la Intendencia Regional revocó Resolución N°1808 de 2013, debido a que fue dictada en contravención al marco legal existente, al no respetarse la previa audiencia de los interesados y la inexistencia del riesgo de incendio denunciado por los solicitantes, que el nuevo trazado no admitía el tránsito vehicular, ni permitía a los pescadores extraer recursos marinos.
- d) Mediante Resolución Exenta N°523 de fecha 28 de octubre de 2018, la Subsecretaria del Ministerio de Bienes Nacionales, en cumplimiento a lo dispuesto por el Intendente mediante Resolución Exenta N°867, de 18 de octubre de 2019, aclaró y complementó la Resolución Exenta N°5, de 1984, incorporando en su parte resolutive el numeral 3°, en el cual se deja constancia que junto al tránsito peatonal, se considera el tránsito de ciclos y el de vehículos motorizados según las disposiciones del DFL1 de 2009 y Ley N°18.290, sobre tránsito.
- e) Que el gravamen impuesto por la Resolución Exenta N°5, que señala el reclamante, corresponde a la vía de acceso que afectaría a su predio, fijada por el 1.1. de la citada resolución del año 1984. La cual señala ser una vía que atraviesa el Fundo Alto Colorado en toda su extensión, que va desde el KM 16,00; pasando por el km. 19,50 y siguiente de la bajada sur en la bifurcación que se produce en el km. 29,20 hasta el km. 32,40 que corresponde al mar chileno.

En cuanto a la suficiencia de fundamento de la resolución reclamada:
señala en síntesis que:

1. La resolución reclamada se ajusta a derecho, ya que indica, que la actuación de la autoridad administrativa propende al bien común y contribuye a la adecuada aplicación de la legislación vigente. Fundado en el sentido natural y obvio de las palabras establecidas por el legislador en el artículo 13 del DL1939; además de aplicar un criterio de racionalidad, ya que el acceso, difícilmente, puede ser peatonal si la longitud del camino para llegar a la playa es de 10 kilómetros, lo cual no cumpliría con el objeto de permitir llegar al bien nacional de uso público para fines turísticos o de pesca.

Agrega que la dictación de la Resolución reclamada tiene como base los informes de fiscalización de las vías de acceso de los predios denominados Topocalma, Santa Martha, Mónaco, Panilonco y Alto Colorado, practicada por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes



Nacionales de la región de O'Higgins con fecha 13 de febrero de 2019; y de fecha 05 y 6 de septiembre de 2019.

Indica que la vía de acceso referida, siempre ha sido un acceso vehicular, conforme a lo expresado en Resolución Exenta N°5/84, relativo a *“el acceso a esas playas lo constituyen **caminos interiores** de los predios denominados Topocalma, Santa Martha, Mónaco, Panilonco y Alto Colorado”* Lo que da cuenta de la vialidad existente que se utiliza como tal. Basando en ello y tras la evidente necesidad de precisar las características de los accesos fijados por la Resolución Exenta N°5/84.

2. Inexistencia de motivos para prohibir el acceso vehicular a la playa: controvierte que resolución exenta N°1808/2013 (derogada por Resolución N°484/2017), en su parte resolutive, modificó el trazado del Fundo Topocalma, el que no tiene relación alguna con el Fundo Alto Colorado, de propiedad de la reclamante, el cual se ha mantenido inalterable desde 1984. Por lo que dicha resolución no le empece y no puede ser considerado como argumento para afirmar la existencia de un peligro inminente para que particulares transiten por dicha vía o un riesgo de incendios forestales. Tampoco, la resolución reclamada, refiere a que el predio del actor quede afecto como zona de camping.
3. Mayor detrimento o perjuicio para el predio: la reclamada controvierte dicho argumento, señalando que el acceso a la playa fijado por RE N°5/84, siempre ha contemplado un acceso vehicular atendido a que en el considerando segundo de dicha resolución se habla de *“caminos interiores”*.

Agrega que, es el mismo reclamante quien reconoce que a vía de acceso a la playa transitan los vehículos del Sindicato de Buzos Mariscadores, maquinaria pesada, camiones madereros y tránsito de animales, por lo que resultaría evidente que el tránsito vehicular se encuentra habilitado, por lo que indica, no sería efectivo que deba incurrir en gastos para dar cumplimiento a la RE N°523 de 2019.

Previas citas legales, finaliza señalando que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 del DL 1939 y resolución N°523 de fecha 18 de octubre de 2019, no se producen daños innecesarios al reclamante que hagan procedente la presente reclamación, por lo que solicita el rechazo de ella con costas.

7° Conciliación: Con fecha 17 de marzo de 2020, se lleva a efecto audiencia de conciliación, la cual **no se produce**, en atención a la rebeldía de la parte demandante.



8° Recibe a Prueba: Con fecha 13 de agosto de 2020, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes:

1. Efectividad que la Resolución Exenta N° 523, de fecha 28 de octubre de 2019, dictada por la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, carece de fundamento técnico, pone en peligro la seguridad de los particulares, crea peligro de incendios forestales y causa daños innecesarios al propietario. Circunstancias que lo justifican.
2. Efectividad de que la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, carece de legitimación pasiva en estos autos.
3. Si la Resolución N°5 de fecha 02 de julio de 1984 de la Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales, comprendía además el tránsito vehicular. Circunstancias que lo justifican.

Notificándose expresamente la parte reclamante, con fecha 18 de enero de 2021 y por cédula a la abogada de la parte demandada, con fecha 22 de enero de 2021.

9° Reactiva probatorio: Con fecha 24 de marzo de 2022, se reactiva el termino probatorio, el cual se tuvo por notificado expresamente a la parte reclamante, con fecha 25 de marzo de 2022; y con fecha 16 de mayo de 2022, por cédula, a la parte demandada.

10° Cita a oír sentencia: Con fecha 16 de noviembre de 2022, se citó a las partes a oír sentencia.

CON LO RELACIONADO YCONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LA OBJECCIÓN DOCUMENTAL (FOLIO 81)

PRIMERO: Que, a folio 81, con fecha 30 de mayo de 2022, el reclamada objeta los documentos acompañados con fecha 26 de mayo de 2022, haciendo presente que la “impresión portal El MERCURIO”, que es una impresión de un portal de noticias y no un documento oficial emanado de alguna de las partes por lo cual su valor probatorio sería nulo. Además de carecer de rubrica, no siendo válido o autentico.

En cuanto a los documentos acompañados en los números 4 y 5, escrituras públicas protocolizadas no habiendo intervención de esta parte en ellas, estas solo dan certeza de quien las suscribió y de la fecha en que ellas fueron autorizadas, pero no de su veracidad en cuanto al fondo de dichos informes; por lo que, al ser una prueba constituida por tercero, carece de valor probatorio mientras no sean ratificados en juicio.



SEGUNDO: Que, conferido el traslado, la parte reclamante evacúa su traslado, dentro de plazo, con fecha 02 de junio de 2022. Quedando la resolución de la objeción documental para sentencia definitiva, con fecha 03 de junio de 2022.

TERCERO: Que, las alegaciones formuladas por la reclamada, dicen relación con el valor probatorio de los documentos objetados, cuestión que es privativa del juez, al momento de ponderar la prueba, lo que lleva a concluir que esta deberá rechazarse tal como se dirá en la parte resolutive de esta sentencia.

II. EN CUANTO AL FONDO:

CUARTO: Que, con fecha 22 de noviembre de 2019, comparece **Alejandro Marcelo Cuevas Pizarro**, abogado en representación de la sociedad **FORESTAL NILAHUE S.A.**, quien interpone **reclamo del artículo 13 del Decreto Ley N° 1939 del año 1977**, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado judicialmente por el Consejo de Defensa del Estado – Procuraduría Fiscal de Rancagua, representado por el Abogado Procurador Fiscal de Rancagua doña Lya Hald Ramírez, por el actuar del Ministerio de Bienes Nacionales – Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; y en contra de la **INTENDENCIA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS**, todos anteriormente individualizados; por los fundamentos relatados en la parte expositiva de esta sentencia los cuales se dan por expresamente reproducidos, por fines de economía procesal.

QUINTO: Que, el inciso 2° del artículo 13 del Decreto Ley 1939, consagra que: *“La fijación de las correspondientes vías de acceso la efectuará el Intendente Regional, a través de la Dirección, previa audiencia de los propietarios, arrendatarios o tenedores de los terrenos y, si no se produjere acuerdo o aquéllos no asistieren a la audiencia, el Intendente Regional las determinará prudencialmente, evitando causar daños innecesarios a los afectados. De esta determinación podrá reclamarse a los Tribunales Ordinarios de Justicia dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación de la resolución de la Dirección, los que resolverán con la sola audiencia del Intendente y de los afectados.”*

SEXTO: Que, con fecha 09 de enero de 2020, el Fisco de Chile, contesta la reclamación deduciendo excepción perentoria de legitimación pasiva de la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales, región de O'Higgins, fundamentando que es la misma norma establecida en el artículo 13 del DL 1939, la que determina el sujeto pasivo de la reclamación y no procedería la reclamación contra este; y contesta demanda en los términos ya referidos en la parte expositiva de la sentencia, los cuales se dan por expresamente reproducidos.

SÉPTIMO: Que, en atención a lo prescrito en el artículo 13 del DL 1939 y naturaleza jurídica de la acción de reclamación, la cual tiene por objeto determinar



la ilegalidad o arbitrariedad de un acto administrativo; este tribunal concluye que los sujetos activos y pasivos de la litis se encuentran determinados por el legislador en la norma señalada. Razón por la cual se procederá a acoger la excepción deducida, por falta de legitimación pasiva de la Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales, región de O'Higgins y, en consecuencia, se rechazará la reclamación.

Sin perjuicio que la circunstancia anotada en el párrafo precedente, este sentenciador se hará cargo de los argumentos de fondo, de la forma que se dirá en los considerandos octavo a decimoquinto del presente fallo.

OCTAVO: Que, el objeto de la norma transcrita en el considerando quinto y sobre la cual se plantea la presente reclamación, radica en que los propietarios ribereños puedan ser oídos, lo que no requiere necesariamente la realización de una audiencia común, sino oír a las partes afectadas, en pro de un debido proceso.

NOVENO: Que, del tenor de la reclamación efectuada a folio 1, se desprende que el motivo de impugnación de la Resolución Exenta N°523, de fecha 28 de octubre de 2019, la cual complementa y amplía, a criterio de la reclamante, la Resolución Exenta N° 5 del 2 de julio de 1984, permitiéndose una nueva vía de acceso vehicular a la playa, cuando en la práctica dicho acceso siempre fue exclusivamente peatonal respecto de terceros ajenos al predio; carece de fundamentación técnica, y fue realizada, según lo indicado en el libelo, sin visita a terreno. Lo cual implicaría un peligro para terceros ajenos al predio debido a las condiciones geográficas del fundo Alto Colorado, por el riesgo de incendios al no ser apto para zona de camping y el detrimento o perjuicio para el dueño, que eventualmente, dificultaría y encarecería la operación forestal-ganadera.

DÉCIMO: Que, la competencia de este Tribunal para conocer de la acción comprendida en el artículo 13 del Decreto Ley 1939, es limitada, permitiendo el pronunciamiento de este tribunal sólo en aquello relativo a la forma de determinación de las respectivas vías de acceso a la playa, tal como se desprende de su tenor literal; salvo en aquellos casos en que se acrediten daños innecesarios ocasionados por la resolución que se reclama.

Cabe señalar que, en este procedimiento, no corresponde revisar los supuestos o eventuales perjuicios ocasionados por la resolución recurrida, cuestión que debería discutirse en un juicio de lato conocimiento, razón por la cual, respecto de la reclamación de tales perjuicios, hecho controvertido por las partes, este tribunal omitirá pronunciamiento.

DÉCIMO PRIMERO: Que la controversia consiste en determinar si la autoridad recurrida incurrió en un acto arbitrario e ilegal al dictar la Resolución Exenta N° N°523 de fecha 18 de octubre de 2019, que aclaró y complementó la Resolución



Exenta N°5 de fecha 22 de julio de 1984, incorporando en su parte resolutive el numeral 3°, en el cual se deja constancia que junto al tránsito peatonal, se considera el tránsito de ciclos y el de vehículos motorizados según las disposiciones del DFL1 de 2009 y Ley N°18.290, sobre tránsito.

DÉCIMO SEGUNDO: Que, el inciso final del artículo 3° de la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra que: *“Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediere una orden de suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro del procedimiento impugnatorio o por el juez, conociendo por la vía jurisdiccional.”*

DÉCIMO TERCERO: Que, atendida la presunción de legalidad del acto administrativo impugnado, correspondía al actor acreditar la ilegalidad del acto administrativo impugnado.

DÉCIMO CUARTO: Que, en el mérito de los antecedentes agregados al proceso, especialmente aquella rolante a folio 3 y 14, y conforme se señala, en el segundo párrafo del numeral 9 de la resolución recurrida, *“...los informes de fiscalización realizados por personal de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, la distancia que existe entre la entrada de los predios gravados por la Resolución N°5 de 1984 y la playa de mar es de aproximadamente 10 kilómetros, de manera que, aplicado el criterio de racionalidad, no resulta exagerado ni excesivo, estimar que el acceso debe ser principalmente vehicular, más aún si existen caminos que acceden a la playa de mar desde la fijación de los mismos.”* Dando cuenta de la existencia de informes de fiscalización previos, como así mismo el ordinario N°492 de fecha 11 de octubre de 2019, dirigido al Ministro de Bienes Nacionales, en el cual se precisa el alance y características de los accesos establecidos por resolución N°5; se logra acreditar que la resolución impugnada posee antecedentes previos que respaldan su acto administrativo.

Por otra parte, es la misma reclamante quien incorpora como prueba documental, Carta del Sindicato de Buzos Mariscadores y Ramas Similares de Pichilemu, en la cual se señala, en su punto 2, que: *“Nunca se nos ha negado el libre tránsito de nuestros vehículos para trasladar nuestras herramientas y enseres personales...”*; agrega dicha carta que tampoco se les ha prohibido instalar sus campamentos y que solo existe restricción en horas de la noche y la madrugada para *“salir con nuestros productos.”*; por lo que se puede concluir que efectivamente existe un camino interior que llega hasta el mar de playa, que permite el tránsito de vehículos, por lo cual no sería factible atribuir a la resolución



N°523 del año 2019, un eventual perjuicio innecesario al permitir el tránsito de ciclos y vehículos motorizados, por caminos interiores ya existentes.

Tampoco se logra acreditar la existencia de un acto ilegal, dado que en la práctica la autoridad competente, dentro del límite de sus atribuciones, ha complementado y aclarado, el acceso a la playa que fue previamente trazado y definido por la Resolución Exenta N°5 del año 1984, propendiendo satisfacer el bien general de la comunidad y adecuar las autorizaciones para un acceso efectivo al sector de playa, atendido su carácter de bien nacional de uso público reconocido y descrito en los artículos 594 y 595 del Código Civil.

DÉCIMO QUINTO: Que, en este orden de ideas, a criterio de este tribunal, la resolución recurrida se encuentra debidamente fundada y razonada conforme a los fundamentos expuestos en ella, circunstancia que, además de lo expuesto en el considerando séptimo, conduce ineludiblemente al rechazo de la reclamación.

DÉCIMO SEXTO: Que, las demás pruebas aportadas por la reclamante, resultan insuficientes para acreditar la ilegalidad o arbitrariedad del acto administrativo reclamado, por lo cual deberá rechazarse la acción

DÉCIMO SÉPTIMO: Que la restante prueba rendida, no detallada o considerada en forma especial, en nada incide en lo asentado precedentemente.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en mérito de lo razonado en el considerando séptimo, existen razones de forma para rechazar la reclamación y, de lo expuesto en los considerando octavo a decimoquinto, además, concurren argumentos de fondo que aportan a la decisión de rechazo. Así, cabe afirmar que la reclamante no tuvo motivos plausibles para litigar, en tanto todos los extremos de su pretensión han sido desestimados. Se tiene presente además que de antecedentes rendidos por la propia reclamante, se extrae que el camino es utilizado por vehículos, lo que quita todo sustento a una afirmación que sostenía la estructura fundamental de su reclamo. En consecuencia, la reclamante debe ser necesariamente condenada en costas.

Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 589 y 1698 y siguientes del Código Civil; artículos 144, 170, 341, 342, 346, 384, 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículos 13 y siguientes del Decreto Ley 1939 y, artículos 3 y siguientes de la Ley N° 19.880 se declara:

- I. Que, se **RECHAZA**, objeción documental deducida por la parte reclamada a folio 81.
- II. Que, se **ACOGE** excepción perentoria de falta de legitimación pasiva de Secretaría Ministerial de Bienes Nacionales, región de O'Higgins, deducida por la reclamada en escrito de contestación de demanda, rolante a folio 14.



- III. Que, se **RECHAZA EN TODAS SUS PARTES** reclamación de acto administrativo, deducido a folio 1 por **Sociedad Forestal Nilahue S.A.**, con fecha 22 de noviembre de 2019.
- IV. Que se condena en costas a la reclamante.
Anótese, regístrese y notifíquese.

Pronunciada por don **VICTOR LEOPOLDO SANCHEZ GUTIERREZ**, Juez Titular del Juzgado de Garantía, Letras y Familia de Pichilemu.

En **Pichilemu**, a **diez de Marzo de dos mil veintitrés**, se notificó por el estado diario, la resolución precedente.

